

Editorial

Los cien primeros días del gobierno de ARENA

La cantidad y gravedad de los problemas, que afligen actualmente a El Salvador es ingente. Precisamente por ello carece de sentido pedir que en cien días de gobierno se haga algo decisivo en cuestiones como la guerra, la miseria masiva, la violación de los derechos humanos, el desorden administrativo, la ineficiencia judicial y tantas otras, configuradoras de la situación actual. No obstante, un análisis de los cien días, de un gobierno de ARENA, que se considera asimismo como radicalmente distinto del anterior gobierno del Partido Demócrata Cristiano, puede ser útil, no sólo como tarea teórica de interpretación, sino también como pauta de examen y propuesta de corrección, en lo que fuera necesario.

Para hacerlo académicamente no se puede partir de la presunción de que ARENA sólo puede actuar de una manera, prefijada en su ideología y en su trayectoria pasada ni tampoco del deseo político de debilitar el poder del gobierno para acrecentar el poder de quienes desean ocupar cuanto antes y lo más ampliamente posible el poder del Estado. Ambas posiciones violentan desde su inicio todo intento de objetividad, que debe ser exigencia ineludible de la tarea universitaria. Sin caer en ingenuidades académicas y puestos los ojos en lo que es mejor a corta y mediana distancia para las mayorías populares, es preferible atenerse a los hechos como criterio, no único pero sí principal, de interpretación y valoración.

Este es el criterio seguido en los distintos artículos de este número de ECA, dedicado a los cien días del gobierno de ARENA, en el cual se estudian los aspectos económicos, bélicos, jurídicos, de derechos humanos, del diálogo con el FMLN y la opinión pública de los salvadoreños sobre dicha gestión gubernamental. Pero hace falta

asimismo una visión de conjunto y esta es la que pretendemos ofrecer en este editorial, dividido en tres secciones principales: la política, la económica y la relacionada con la democratización, especialmente con la situación de los derechos humanos, todo lo cual permitirá sacar finalmente algunas conclusiones operativas.

1. La cuestión política

La primera gran cuestión política era la de definir qué línea iba a predominar en ARENA. Muchos daban por asentado, y así lo proclamaban, que la línea Cristiani iba al trono, pero que la línea D'Aubuisson iba al poder. Algunos quisieron ver la confirmación de esto en la composición del gabinete ministerial. Pero esto no es así y no se ha demostrado así en los primeros cien días. Ciertamente no se ha apreciado ninguna pugna abierta entre las dos líneas, pero tampoco ninguna imposición de la línea militarista de D'Aubuisson. Incluso el vicepresidente Merino, quien ocupa la importante cartera del Interior, sigue ciertamente la línea clásica de ARENA, sobre todo en el campo de asuntos migratorios, de los refugiados, de las áreas y modos de desarrollo y de los municipios, pero sin desentonar de lo hecho en otros ministerios o en alguno de los puntos claves en estos cien días, como es el diálogo con el FMLN. En el caso muy significativo de la configuración del Ministerio de Defensa, no puede afirmarse que se muestre el predominio de la línea más extremista de ARENA, antes al contrario un freno de la misma. No pudo el presidente Cristiani conformar el gabinete a su gusto, pero ello se debió fundamentalmente a que no aceptaron algunos de los invitados, quienes no eran ciertamente de la línea más dura. Finalmente quedó un gabinete bastante homogéneo sin grandes ni fuertes personalidades, que responde más al estilo y voluntad de Cristiani que a la de otras líneas y caudillismos de ARENA.

El discurso inicial y programático de su presidencia marcó también una línea distinta de la esperada. En él se reflejan ciertamente algunos de los postulados típicos de ARENA como en el caso de los cuatro principios rectores: libertad, honestidad, legalidad y seguridad y en el clamoroso silencio sobre la justicia. Pero en los desafíos y retos a los cuales se propuso dar respuesta están, en primer lugar, la búsqueda de una solución política y negociada al conflicto armado, la liberalización progresiva y gradual de la actividad económica, la efectividad de la reforma agraria, la promoción social integral en la alimentación, la salud, la educación y la cultura y el logro de un poder judicial más eficaz y de un respeto cada vez más pleno de los derechos humanos. Finalmente como instrumentos para lograr todo esto, Cristiani propuso el permanente diálogo interpartidario, la promoción del pluralismo

Se va consolidando en el gobierno la línea civilista de Cristiani frente a la línea militarista de D'Aubuisson y a la línea escuadronista de cabeza clandestina.

ideológico y la constante comunicación con todos los sectores nacionales para generar una verdadera participación en las decisiones del gobierno. Aunque de momento se trataba de palabras, eran palabras de conciliación y no, como algunos esperaban, de confrontación. En particular, el ofrecimiento de acabar con la guerra fratricida e injusta mediante un diálogo serio con el FMLN, y esto como primer desafío de su gobierno, representaba un buen augurio y un compromiso, cuya verdad o falsedad podría comprobarse pronto.

Parecía dibujarse con todo ello una línea de moderación, contrastante con lo que se esperaba de ARENA y con lo que había sido en parte la propaganda política y con lo que había sido el aumento de la violencia en las vísperas de su toma de posesión (ver "Vísperas violentas," ECA, abril-mayo, 1989, 279-294). Esa línea fue puesta inmediatamente a prueba con el asesinato del Ministro de la Presidencia, doctor Rodríguez Porth y con una serie de acciones terroristas tanto de la izquierda como de la derecha. La extrema derecha quería obligar al nuevo presidente a actuar con mano dura contra sus enemigos de siempre y a un plegarse a la línea más extrema de su partido, de la Fuerza Armada y del capital; la extrema izquierda, por su parte, no quiso darle cuartel para impedir que iniciara un proceso de consolidación. El gobierno de Cristiani y el alto mando no cayeron en la trampa y, a pesar de las presiones, mantuvieron una línea de moderación y no llegaron a retirar la propuesta de diálogo, la cual no hubiera sido difícil postergar, dado lo grave de la crisis. La posición fue acertada y al final de los cien días habían cesado estos esfuerzos burdos de desestabilización y, o de radicalización. El intento de moderación de las fuerzas de la derecha aparecía más como una estrategia que como una pura táctica electoral. Pero también aparecían las dificultades de toda índole que se podían presentar a la línea civilista de ARENA en su propósito de construir una nueva derecha conservadora capitalista, modernizante y no oligárquica.

De momento y con las matizaciones que haremos más abajo puede decirse que se va consolidando en el gobierno la línea civilista de Cristiani frente a la línea militarista de D'Aubuisson y a la línea escuadronista de cabeza clandestina. Esto se refleja en dos acontecimientos de gran importancia, ocurridos en estos primeros cien días, la firma del acuerdo de Tela y el inicio del diálogo con el FMLN.

El acuerdo de Tela supone la ratificación y el avance del proceso



que se inició en Esquipulas II hace dos años. Las líneas duras de ARENA se opusieron consistentemente a Contadora, al plan Arias y a los primeros acuerdos de Guatemala, especialmente en lo referente a dar confianza a los sandinistas en el proceso de democratización de Nicaragua, en desmovilizar a los contras y en aceptar un arreglo negociado con el FMLN. Ahora bien, todos estos propósitos han quedado reconfirmados en Tela, donde por primera vez se ha hecho presente un gobierno de ARENA, cuyo presidente ha ofrecido, primero implícitamente y cada vez más explícita y comprometidamente, un apoyo total al proceso de Esquipulas II, abriéndose así a una nueva política centroamericana, que abandona los vituperios y amenazas contra Nicaragua y acepta el resultado de unas elecciones libres en ese país. Cristiani intentó sacar en Tela al menos un paralelismo entre el caso de los contras y el del FMLN, pero al percatarse de que tal pretensión resultaba inaceptable para el resto de los presidentes, tuvo que contentarse con algunas matizaciones verbales introducidas en el documento final.

Este avance ha sido posible por el progreso general de la situación centroamericana, por el fracaso de la anterior política norteamericana en el área y por las concesiones de los sandinistas. Pero también por la moderación de las posiciones de ARENA, dado el predominio relativo en su interior de la línea más moderada. Puede pensarse que a Cristiani no le quedaba otro remedio que firmar el acuerdo de Tela, pero podría haberlo obstaculizado en conexión más estrecha con los intereses norteamericanos, los cuales no dejaron de presionar fuertemente tam-

bién en esta ocasión. No fue así y esto demuestra, ante todo, que el proceso salvadoreño y centroamericano están entrando en una nueva fase, pero, también, que el gobierno de ARENA lo ha percibido así y no pretende arcaicamente enfrentarse con el curso actual de la historia.

El segundo gran acontecimiento en estos primeros cien días, en los que se demuestra lo mismo, es el encuentro de "entendimiento negociador" entre el gobierno de ARENA y el FMLN. Había que poner a prueba la voluntad política expresada en el discurso inaugural a favor de un diálogo que resultara eficaz para ir acercando el momento de la paz. Múltiples fueron las dificultades, que hubieran podido servir de pretexto para dilatar la primera reunión. No la favorecía el ala más extrema de su partido y el conjunto no débil de las fuerzas extremistas del país, ni el endurecimiento de la violencia, ni la reticencia del FMLN, ni las dificultades puestas por los invitados a participar en la comisión de diálogo. Todo pudo ser superado al borde de los primeros cien días. La comisión final no fue integrada por representantes del ala dura de ARENA, sino por personalidades capaces de llevar adelante en el fondo y en la forma las directrices de Cristiani. Se pudo arreglar asimismo la reunión entre ambas delegaciones con flexibilidad, de modo que se aceptaron propuestas de los partidos y del FMLN, que cambiaron lo planeado por la parte gubernamental. Y se llegó a realizar el primer encuentro conforme en lo fundamental al modelo propuesto por Cristiani. Todo ello no comprueba todavía hasta dónde alcanza la voluntad política y el poder real de Cristiani, pero es un buen comienzo como prueba de avance de la moderación de la derecha. La prueba de fuego estará en la próxima reunión de San José de Costa Rica, donde ya se entrará a fondo en el cese de hostilidades y en los requisitos exigidos para concertar ese cese por parte del FMLN.

Reducida la cuestión política a estos puntos importantes, centrados en la tesis de una incipiente moderación de la derecha, reflejada en cierta consolidación de la línea de Cristiani y comprobada por los avances iniciales en las tareas históricas de Esquipulas II y del diálogo-negociación entre el gobierno y ARENA, puede hablarse de un comienzo positivo, que muestra, sin embargo, graves dificultades, hasta ahora superadas, pero que pudieran convertirse en insalvables, cuando se acercara la hora de decisiones definitivas. Menos positivo debe ser el juicio, aun dentro del marco de la cuestión política, si se analizan las dos propuestas del discurso inicial, la del permanente diálogo interpartidario y la de la participación en las decisiones del gobierno de todos los sectores nacionales. Algo de esto se ha dado, pero no de forma suficientemente satisfactoria. Pero no estriba en esto el mayor problema de los primeros cien días, sino en las cuestiones siguientes

La gran pregunta es quién va a correr con los costos y quién va a aprovecharse prioritariamente de los beneficios, si los más pobres o los más ricos.

que pasamos a enjuiciar.

2. La cuestión económica

Una de las diferencias más típicas del gobierno de ARENA frente al gobierno de la democracia cristiana va a darse en el terreno económico. Los areneros proponían liberalizar la economía completamente en contraste, según ellos, con la economía socializante y estatizante de los demócrata cristianos. No se trata tan sólo de ser más eficaces en la promoción del desarrollo económico gracias a una mayor profesionalidad y probidad, sino sobre todo por el establecimiento de un nuevo modelo económico, centrado casi absolutamente en la empresa privada y en la disminución del aparato económico del Estado y aun de su intervención en la planificación y dirección de la actividad económica. Así, respecto de las grandes reformas estructurales se intenta privatizar la reforma agraria con menoscabo de la propiedad cooperativa; se está procurando privatizar la banca, eso sí, después de sanearla a costa del Estado y del contribuyente público; y se está liberalizando el comercio exterior, especialmente el del café y el del azúcar. Hay que imponer una estricta economía de mercado libre, aunque aplicada gradualmente, acompañada de un fuerte programa de ajuste económico, para sanear los desequilibrios de la actual situación.

En estos primeros cien días se ha podido apreciar poco el funcionamiento de este nuevo modelo, porque se tardó bastante en echarlo a andar pretextando que el erario nacional se había encontrado en un estado mucho peor del esperado. Las medidas más llamativas han sido la notable elevación de los servicios básicos (transporte, luz y agua), el encarecimiento de los productos de la canasta básica y, sobre todo, de los productos farmacéuticos, cuya industria los ha considerado liberalizados, la práctica desaparición de los dólares a cinco colones, pues el precio de la divisa ha quedado al libre juego de la oferta y la demanda (6.42 colones por dolar en estos días) y la drástica reducción del crédito. (Otras medidas de mayor alcance pueden verse analizadas en el artículo de Francisco J. Ibisate, en este mismo número de la revista).

Todo ello ha causado una moderada protesta popular más de palabra que de hecho, habiendo sido el FMLN el que en la ciudad tomó como tarea quemar buses en protesta por la subida de las tarifas ante la indiferencia de los usuarios, quienes se han ido acomodando a la nueva

carga económica. En parte previendo esta protesta, el gobierno ha destinado 960 millones de colones para ayudar directamente, sobre todo en el rubro de alimentación, a los sectores más pobres y ha protestado contra la subida de algunos precios no aceptando que algunos empresarios estén intentando obtener ganancias desorbitadas.

Lo que este modelo tiene de saneamiento y de tratamiento de choque parece inevitable y lo han puesto o lo están poniendo en práctica países con gobiernos extremadamente derechistas (Chile), moderadamente centristas (Venezuela y Argentina) o abiertamente revolucionarios (Nicaragua) para citar tan sólo a los más significativos. La gran pregunta es quién va a correr con los costos y quién va a aprovecharse prioritariamente de los beneficios, si los más pobres o los más ricos. El gobierno proclama que los únicos privilegiados en su gestión van a ser los más pobres de los pobres, pero esto a veces parece que debe interpretarse como si a los pobres se les van a dar las migajas del banquete y a los ricos los manjares del mismo, a aquéllos la limosna y a éstos las ventajas del capital. Ciertamente los 960 millones son más que migajas, pues representan alrededor de un 20 por ciento del presupuesto nacional, pero son pan para hoy y hambre para mañana. Piensa, sin embargo, el gobierno que en dieciocho meses sus medidas económicas



darán frutos en relación con el crecimiento del producto interno bruto, con la disminución del paro, aunque no con sustanciales subidas salariales. A esto se añaden algunas medidas como la de subir la base de quienes no deben pagar impuestos.

Los resultados están por verse en lo referente al crecimiento económico. Pero, aunque éste se diera, quedarían en pie algunas cuestiones fundamentales. Ante todo, la cuestión previa de si una empresa privada, que ha sido incapaz en los años más favorables de sacar al país del subdesarrollo, lo va a ser ahora. Ni las clásicas catorce familias de los años cuarenta, ni las sesenta oligárquicas de los años siguientes (ver M. Sevilla, "Visión global sobre la concentración económica en El Salvador," Boletín de Ciencias Económicas y Sociales, San Salvador, mayo-junio, 1984, 155-190, especialmente 188-189), han hecho de El Salvador un país próspero, ya no se diga justo. Ciertamente es una necesidad ineludible de El Salvador y de sus mayorías populares un crecimiento acelerado de la riqueza nacional. Lo que hay hoy, aun bien distribuido, no alcanza, ni siquiera mínimamente, para resolver las necesidades básicas de la mayor parte de la población. Quien no tenga un programa para lograrlo en relativamente poco tiempo, no tiene derecho a ponerse al frente del Estado. Pero no puede darse por concedido que quienes nunca lo lograron estén en condición de hacerlo ahora, a no ser que se den entre ellos cambios sustanciales en su propia capacidad productiva y en su voluntad de invertir los capitales, que extrajeron con anterioridad del trabajo de todos y que hoy sólo dan provecho a los países donde están depositados. De momento, el gobierno de Cristiani no sólo no ha logrado el regreso de una cantidad mínima del capital salvadoreño depositado en el extranjero, sino que ni siquiera lo ha pedido. Y este es un fallo importante de la empresa privada que no confía en la situación actual para invertir ese capital y del gobierno, que no se atreve a exigir algo que parece ser una ineludible obligación patriótica y nacionalista.

Todo ello lleva a sospechar que la economía de mercado pueda convertirse no ya en economía social de mercado, sino en economía antisocial de mercado. Aun aceptando que pudiera darse un rápido crecimiento por la vía del mercado, está por verse, si esto va a ir en beneficio de la mayor parte de la sociedad o va a ir en su contra. El mercado con su contraparte política de un Estado de derecho liberal propicia la potenciación del individuo en un contexto de darwinismo social, en el cual prevalece el más fuerte con menoscabo del más débil. A su vez el Estado de derecho liberal implica la protección del individuo emergente contra la preponderancia del poder público. Pero este doble planteamiento desconoce un factor histórico decisivo, con-

sistente en que el individuo puede ser oprimido y explotado no sólo por el poder estatal, sino también por el poder oligárquico, sea éste económico, militar o político. Consiguientemente, hay que arbitrar una protección legal para las mayorías desposeídas contra las minorías, que se hicieron prepotentes en base a la apropiación privada del poder y de sus fuentes.

En el caso concreto del programa económico de ARENA es menester impedir que sea antisocial y lo será si se fomentan las ventajas de los dominadores del mercado, siempre unos pocos, contra los intereses de las mayorías. Sólo una preocupación sincera y efectiva por parte del gobierno y del Estado en general para proteger a las mayorías de los afanes depredadores de la lucha por la existencia en el dominio del mercado y de la supervivencia de los más fuertes puede impedir que la economía de mercado se convierta en economía antisocial de mercado. De lo contrario y en la misma línea del darwinismo social a las mayorías no les quedará otro remedio una vez más que hacer su propia lucha de clases, que en su caso extremo volverá a recurrir a la violencia. En los primeros cien días de Cristiani se aprecian ya síntomas claros de darwinismo económico y sólo tímidos esfuerzos del gobierno para que el consumidor forzado quede protegido de la guerra en la selva, regulada hoy sólo por mecanismos de mercado, que ni siquiera se someten a un estado ideal de competencia perfecta.

Junto con este peligro hay que advertir también, como consecuencia de él, el de la oligarquización creciente de la economía, el cual llevará forzosamente a la oligarquización de todo lo demás. Por un lado, la liberalización de la economía, sobre todo en lo que tiene de reducción de los aranceles, puede poner en grave aprieto a la parte más débil del sector industrial dando ventajas a las industrias más competitivas, al comercio y también al consumidor con recursos suficientes para adquirir bienes importados. Por otro lado, el proceso llevará a una concentración del gran capital en pocas manos, mientras fomenta la privatización individualista en pequeñas parcelas tanto en el campo como en la industria y en los servicios. Se pretende con ello, no tanto volver al estado de cosas anterior a las reformas estructurales con las cuales se pretendió quitar poder a la extrema oligárquica y a la extrema revolucionaria, como a un nuevo reacomodo manteniendo algunas de las reformas y a una renovada potenciación por una vía modernizante de nuevas concentraciones de capital. Pero por mucha que sea esta modernización, dadas las condiciones actuales de El Salvador y las del pasado inmediato, puede darse un retroceso, el cual tarde o temprano volverá a activar la confrontación entre los poderes oligárquicos y los poderes populares.

**El individuo puede ser oprimido y explotado
no sólo por el poder estatal,
sino también por el poder oligárquico.**

No basta, por tanto, tratar de superar la miseria extrema que afecta a la mayoría de la población sin trabajo, sin salarios suficientes, sin vivienda, sin salud, sin educación, sin alimentación adecuada, etc. Mucho se habría hecho, si se consiguieran en corto plazo mejoras sensibles en cada uno de estos rubros, cosa del todo improbable. Pero, aun logrado esto, quedaría el grave problema de la desigualdad excesiva, resultante de una progresiva oligarquización de la estructura socio-económico-política del país. La desigualdad no sería por sí misma mala, si se lograra la satisfacción de las necesidades básicas de las mayorías populares, pero sí lo sería si propiciara una nueva clase que determinara el curso del proceso salvadoreño con mayor poder que el del Estado como representante de la voluntad popular.

Este puede ser el resultado más grave de la sustitución del modelo demócrata cristiano, apoyado por Estados Unidos, por el nuevo modelo también apoyado por Estados Unidos, que ya no parece temer ni el peligro de una insurrección popular ni el de una retroalimentación de las filas del FMLN a partir de los sectores populares, pues supone que éstos se van a contentar ya no por la vía de las reformas, sino por la vía de la reactivación económica. Quienes favorecieron este cambio de estrategia son parcialmente responsables del retroceso histórico, que esto puede suponer respecto del avance de los cambios estructurales, fruto de muchas luchas y de mucha sangre derramada. Este es un punto que el movimiento revolucionario nunca entendió por su política anterior del todo o nada y ello lo llevó a tácticas equivocadas en 1970, 1972, 1976, 1979 y aun desde 1984 a 1989, con los casos de la reforma agraria, del levantamiento militar y aun de las reformas estructurales, y que, sin embargo, ahora parece aceptar como suficiente para superar la oligarquización del país.

En estos primeros cien días del gobierno de ARENA, por lo que toca a la cuestión económica, quedan, por tanto, sin aclararse cuestiones muy graves. No hay todavía signos inequívocos de que se va a caer en los males mortales apuntados, pero sí aparecen síntomas de que no podrá frenarse a tiempo un proceso reaccionario, más propenso a recuperar el pasado que a conquistar el futuro. No se olvide que incluso ya suenan voces, las voces de siempre, de quienes todavía, desde el capital se sienten poco favorecidos y demasiado controlados por el gobierno neo-liberal de Cristiani.

3. La democratización del país

Al presentar el problema de la democratización de El Salvador es inevitable enfocar la situación de los derechos humanos, lo cual nos va a llevar de la mano a medir el poder y la voluntad del gobierno de Cristiani en dominar y no ser dominado por la Fuerza Armada en la conducción de la guerra y de la seguridad nacional, que es el origen mayor de la violación de los derechos humanos.

En general, 1988 supuso un aumento en la violación de los derechos humanos, tal como lo recogió el relator de las Naciones Unidas y 1989, a su vez, está suponiendo un aumento sobre 1988. Esto debe ser atribuido a una nueva forma de conducir la guerra por parte de quienes tomaron el relevo del alto mando, lo cual ocurrió ya durante la presidencia de Duarte. En cambio, el relevo de Duarte por Cristiani y del Partido Demócrata Cristiano por ARENA no muestra cambio significativo en la cuestión más grave de los derechos humanos, la referente a las muertes.

En el primer trimestre de 1988 hubo 229 muertos de la población civil atribuidos a la Fuerza Armada mientras que en el primer trimestre de 1989 hubo 269; hubo 163 y 392 capturados respectivamente, mientras que el número de desaparecidos bajó en los mismos períodos de 51 a 38. La situación empeoró aún más en el segundo trimestre, todavía bajo la presidencia de Duarte, aunque ya con la presión del triunfo electoral de ARENA, tanto en muertos como en capturados con un promedio mensual en ambos casos superior a 150. No obstante, comparados los dos primeros meses de Cristiani con los dos últimos meses de Duarte se da una mejora: 177 civiles muertos contra 363 y 352 capturados frente a 388, siendo similar el número de desaparecidos, 22 y 23 respectivamente.

Este resumen de datos prueba, ante todo, que la violación de los derechos humanos fundamentales se sigue dando de forma muy grave y sistemática. No por estar relacionados con la guerra dejan de ser casos gravísimos en sí mismos y en el modo de ser perpetrados. Sobre todo, en el caso de las muertes, pero también en el de las capturas, acompañadas con frecuencia, no sólo de ilegalidades formales graves (los hechos no se identifican adecuadamente, los plazos no se respetan, etc.), sino de casos comprobados de torturas de todo tipo. Por lo general, el ejército es el responsable de las muertes y los cuerpos de seguridad de las capturas. Pero el que sea la Fuerza Armada la que lleva en sus manos esta política de violación de los derechos humanos para combatir al FMLN y a todos cuantos piensa puedan estar relacionados con él, no excluye de responsabilidad al presidente Cristiani,

no tanto por ser el comandante general de la Fuerza Armada, sino porque implica una condescendencia culpable y un sometimiento peligrosísimo del poder civil al militar. Aunque las cifras le favorecieran en relación con los últimos tiempos del presidente Duarte, esto no es consuelo ni justificación y contradice los propósitos anunciados en sus discursos. Peor sería no aceptar estos datos, sustentados, en lo fundamental, unánimemente por los más distintos organismos de defensa de los derechos humanos. Lo menos que se le puede exigir al presidente es que no disculpe tales acciones y tome medidas para lograr cuanto antes la supresión drástica de los modos sucios de hacer la guerra.

Está, en segundo lugar, el hostigamiento y persecución del movimiento popular y, en general, de cuantos se estima ser contrarios al gobierno y favorables al FMLN. Los cateos de las sedes sindicales, de los organismos eclesiales de ayuda popular, de las repoblaciones, los varios cercos a la Universidad de El Salvador, la obstaculización y amedrentamiento de las movilizaciones populares, los violentos ataques propagandísticos incluso contra eclesiásticos y académicos connotados y aun contra políticos de la oposición, crean un ambiente, que se haría mal en calificarlo de fascista, pero que cualitativamente no se diferencia mucho de lo que se hizo en otras ocasiones y supone un freno al proceso democrático del país. Ciertamente ha habido casos significativos, especialmente el de los lisiados, en los cuales se ha evitado prudentemente el emprender acciones violentas o simplemente penales, pero no puede ocultarse un hostigamiento continuado al movimiento sindical y popular con el pretexto de que son fachada o están orgánicamente conectados con el FMLN. Aunque esta conexión se diera, el gobierno y los cuerpos de seguridad están obligados a respetar la legislación vigente y a ofrecer generosamente amplios espacios políticos, que eviten toda tentación de favorecer la violencia armada.

Están, en tercer lugar, los intentos de endurecer la legislación penal para poder frenar a quienes denuncien al gobierno y a la Fuerza Armada en sus violaciones de los derechos humanos y, en general, quienes utilizan el derecho de libre expresión, garantizada por la constitución. Por presión de distintas fuerzas sociales se logró evitar una legislación específica contra el terrorismo, bajo la cual se escondía una restricción drástica de libertades fundamentales, pero no se pudo evitar que una asamblea obsecuente aprobara a media luz reformas al código penal y procesal penal, dando armas al gobierno para amenazar y conseguir así autocensuras paralizantes.

Todo esto es grave y en nada facilita el proceso de democratización del país y, menos aún, un proceso de reconciliación, que permita la

transformación del FMLN en un partido político, una vez abandonado el uso de las armas y aun el recurso a la violencia. Pero esto no justifica el definir al actual gobierno como una dictadura fascista encabezada por Cristiani, cuyo intento principal sería prolongar la guerra. Tal definición es teóricamente del todo incorrecta por más que pueda ser propagandísticamente útil, pero sólo para muy pocos, pues la mayoría, aun sin conocer las características formales del fascismo, no aprecia gran diferencia entre lo que venía sucediendo en la presidencia de Duarte y lo que se está dando en estos cien días (ver la encuesta de opinión del IUDOP en este mismo número de la revista). La situación es mucho más compleja que ese estereotipo y sólo afrontándola en su complejidad, incluso a la hora de la propaganda, se podrá avanzar en el proceso del diálogo-negociación.

El gobierno de Cristiani está en la paradoja de tener que aparentar no estar en estado de guerra con el FMLN, cuando de hecho lo está. Se trata ciertamente de una guerra sui generis, que no mantiene a todo el país paralizado, sino que lo afecta en una proporción cualitativamente importante, aunque no tanto cuantitativamente. Por eso evita oficialmente hablar de guerra, por eso evita el reconocer al FMLN como parte



El gobierno y los cuerpos de seguridad están obligados a respetar la legislación vigente y a ofrecer generosamente amplios espacios políticos, que eviten toda tentación de favorecer la violencia armada.

beligerante, por eso no le es fácil declarar estado de sitio o suspender oficialmente las garantías constitucionales. Pero el hecho es que la guerra se da y que deben tomarse medidas de guerra. Esta contradicción tiene sus ventajas, reflejadas en un cierto disfrute de libertades democráticas y tiene sus desventajas, reflejadas en prácticas represivas. Por otro lado, el gobierno de Cristiani está condicionado por el compromiso de respetar la legalidad, en la cual se amparan los sectores más extremistas, en lo que la legalidad les favorece, y por la necesidad de dar pasos, necesarios para el acuerdo negociado, pero que pueden presentarse por los enemigos del acuerdo como contrarios o, por lo menos, al margen de la legalidad.

Casos, como el de los lisiados, muestra bien esta paradoja. Se quiere resolver realmente el problema de los lisiados y esto aun en contra de los sectores duros de la Fuerza Armada y de ARENA. Pero no se les puede dar el estatuto de lisiados de una guerra que no se reconoce como tal. Para resolver el impasse se arbitra una amnistía, que legalmente cubra el expediente, pero se permite salir del país a los lisiados sin que formalmente acepten acogerse a ella. Es decir, no sólo se procede humanitariamente y se evitan las soluciones más violentas, sino que incluso se actúa un tanto al margen de la ley, aunque no en contra de ella. Esto demuestra prudencia política y disposición para resolver los problemas.

En conclusión, las presiones indudables para entrar en soluciones drásticas tanto en lo económico como en lo político y en lo militar están siendo obstaculizadas por la complejidad del proceso y no tanto por la voluntad de los grupos, mucho menos de los individuos en particular. La gradualidad en las medidas económicas viene exigida por el temor a que medidas más drásticas originen un gran descontento popular. La seriedad del proceso de diálogo-negociación viene exigida por la inconveniencia general de la guerra, así percibida por la mayor parte de la población, de las fuerzas sociales y de los partidos políticos, y por el nuevo contexto mundial y regional. Cierta respeto a los formalismos del proceso democrático viene exigido, sobre todo, por la presión internacional y, en particular, por la necesidad de ganar imagen ante el congreso de Estados Unidos.

Por eso, el gobierno de Cristiani ha buscado el apoyo internacional, que le es indispensable política y económicamente. Esta tarea la empezó

el partido retirando del primer plano a los representantes más connotados de un pasado oscuro y sangriento. La continuó el presidente electo antes de tomar posesión. Y se ha continuado en estos cien días todavía con éxito indeciso, pues muchos de los gobiernos, aunque sorprendidos por la relativa moderación del arranque de Cristiani, aún no están seguros de lo que pueda suceder en la disputa por la hegemonía en la conducción política, económica y militar del país.

Y esta es la gran interrogante que se abre al término de los primeros cien días. ¿Va a representar Cristiani una cada vez más firme y consolidada moderación y modernización económica y política de la derecha, que llegará a la paz por la negociación y logrará un amplio consenso nacional en lo económico o va a ser tan sólo la fachada de un nuevo proceso de oligarquización, en el cual se endurecerán la guerra y la represión, y aumentará la pauperización, abriéndose todavía más la brecha entre ricos y pobres? Lo sucedido en estos cien días, interpretado a la luz de la nueva fase histórica, que se está abriendo en el mundo, en Centroamérica y en El Salvador, parece indicar que tiene más probabilidades de realización la primera parte de la interrogante, que es, ciertamente, la más conveniente para las mayorías populares y, por tanto, para todo el país. Las dificultades para ello son grandes. Todas las fuerzas, cada una desde su propio aporte y dejando un tanto de lado, por el momento, la cuestión del poder, deberían dedicarse a intentar superarlas. Si esto pudiera alcanzarse a través del diálogo-negociación, en primer lugar del FMLN con el gobierno y, en segundo lugar, con el resto de las fuerzas nacionales, todo sería mucho más fácil.